



RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A.

“Por medio de la cual se resuelve un procedimiento sancionatorio ambiental”

CM5.19.23664
(FAUNA)

EL SUBDIRECTOR AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

En uso de las facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, y 1625 de 2013, la Resolución Metropolitana No. D 404 de 2019, modificada por la Resolución Metropolitana No. D 956 de 2021, modificada por la Resolución Metropolitana No. D 1747 de 2023, y las demás normas complementarias y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

1. Que mediante la **comunicación oficial recibida con radicado No. 022982 del 23 de junio de 2023**, se informó a la Entidad lo siguiente: *“Tenencia de 2 loras barbiamarillas en la dirección Carrera 37 # 71C-32 segundo piso barrio Manrique”*, Distrito Especial de Medellín.
2. Que en ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento asignadas por la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numerales 11 y 12, personal de la Subdirección Ambiental de esta Entidad realizó visita técnica al lugar indicado en la queja; la información quedó plasmada en el **Informe Técnico No. 005037 del 27 de julio de 2023**, en el cual, entre otras cosas, se plasmó lo siguiente:

“2. VISITA TÉCNICA-EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de las actividades de control y vigilancia que le competen a la Entidad como Autoridad Ambiental, personal adscrito a la Subdirección Ambiental en compañía de integrantes del Grupo de Policía Ambiental y Ecológica-GUPAE; realizaron visita técnica el día 20 de junio del 2023 a la carrera 37 No. 71C del municipio de Medellín D.E.

Se visitó el lugar mencionado el día 20 de junio del año en curso, allí se tocó la puerta y salió a atender una señora que se identificó como Nathaly Zuleta Díaz con cedula de ciudadanía No. 1.128.425.881 a quién se le informó el motivo de la visita técnica. La señora Nathaly manifestó que si poseía a los ejemplares de loro y permitió el ingreso a la vivienda con el fin de verificar la especie y las condiciones en las que se encontraban.



@areametropol

www.metropol.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 (57-4) 604 3856000

Durante el recorrido se evidenciaron dos (2) ejemplares de Loro barbiamarillo (Amazona amazónica) en una jaula de tamaño mediano con alimento (semillas de girasol, frutas) y agua a voluntad. La señora Nathaly manifestó que los ejemplares fueron un regalo que le realizaron a su familia hacía aproximadamente dos (2) años, que fueron traídos de Puerto Berrío, Antioquia cuando aún eran pichones.

Se realizó la sensibilización sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre en cautiverio y todos los procesos legales y económicos que esto conlleva, además se explicó la labor realizada por la Autoridad Ambiental en el CAV y los diferentes procesos de rehabilitación para dichas especies; y la señora Nathaly accedió a realizar la entrega voluntaria de los mismos, el hecho quedó registrado en el Formato de recepción de fauna silvestre No. 33280e donde se relacionaron los dos (2) ejemplares de Loro barbiamarillo (Amazona amazónica) hallados en la vivienda y se realizaron las observaciones correspondientes. (Ver anexo)

En la evaluación clínica general de los ejemplares, se encontró un ejemplar activo y atento al medio, con condición corporal 5/5 obesa, mucosas pigmentadas y húmedas, no se evidencian secreciones anormales en cavidad oral, nasal y ojos, no se evidencian lesiones en piel o hematomas, al desplazamiento se evidencia con capacidad adecuada de perchar, pero adopta una posición de acurrucamiento constante, a la palpación osteomuscular se evidencia una leve restricción a la extensión de miembro posterior derecho, aleteo bilateral simétrico, no logra volar, presenta dos plumas de sangre en miembro superior izquierdo, presenta abundante plumón, no se evidencia alteraciones en cavidad celómica y pronóstico es reservado debido a la malnutrición que presenta. El otro ejemplar se encuentra alerta al medio, con condición corporal 5/5, el paciente logra aletear, pero no vuela, no se desplaza, sus miembros posteriores presentan anquilosis esto arroja un mal pronóstico debido a la atrofia muscular que presenta.



Visita de Control y Vigilancia realizada el 20 de junio del 2023 al inmueble ubicado en la carrera 37 No. 71C-32, segundo piso, barrio Manrique, comuna 3 del municipio de Medellín D. E



@areametropol

www.metropol.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 ☎ (57-4) 604 3856000



Visita de Control y Vigilancia realizada el 20 de junio del 2023 al inmueble ubicado en la carrera 37 No. 71C-32, segundo piso, barrio Manrique, comuna 3 del municipio de Medellín D. E



Visita de Control y Vigilancia realizada el 20 de junio del 2023 al inmueble ubicado en la carrera 37 No. 71C-32, segundo piso, barrio Manrique, comuna 3 del municipio de Medellín D. E

(...)

3. CONCLUSIONES



@areametropol

www.metropol.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 ☎ (57-4) 604 3856000

- Se confirma la tenencia de fauna silvestre en la vivienda ubicada en la carrera 37 No. 71C-32, segundo piso, barrio Manrique, comuna 3 del municipio de Medellín D. E.
- En la visita técnica realizada el 20 de junio del año en curso, salió a atender una señora que se identificó como Nathaly Zuleta Díaz con cedula de ciudadanía No. 1.128.425.881 a quién se le informó el motivo de la visita técnica. La señora Nathaly manifestó que si poseía a los ejemplares de loro y permitió el ingreso a la vivienda con el fin de verificar la especie y las condiciones en las que se encontraban.
- Durante el recorrido se evidenciaron dos (2) ejemplares de Loro barbiamarillo (*Amazona amazónica*) en una jaula de tamaño mediano con alimento (semillas de girasol, frutas) y agua a voluntad. La señora Nathaly manifestó que los ejemplares fueron un regalo que le realizaron a su familia hacía aproximadamente dos (2) años, que fueron traídos de Puerto Berrío, Antioquia cuando aún eran pichones.
- En la evaluación general de los ejemplares se observó que estos se encontraban activos y alerta al medio, presentaban un buen desplazamiento pues no se evidenciaron luxaciones o fracturas en sus extremidades aparentemente, sin embargo, se evidenció un plumaje opaco, con presencia de plumón, signo que indica picaje, es decir el comportamiento de las aves de picarse y arrancarse las plumas, aparentemente por estrés o el tipo de alimentación.
- Al realizar la búsqueda acerca de la historia clínica de ambos animales se evidencio que se encontró un ejemplar activo y atento al medio, con condición corporal 5/5 obesa, mucosas pigmentadas y húmedas, no se evidencian secreciones anormales en cavidad oral, nasal y ojos, no se evidencian lesiones en piel o hematomas, al desplazamiento se evidencia con capacidad adecuada de perchar, pero adopta una posición de acurrucamiento constante, a la palpación osteomuscular se evidencia una leve restricción a la extensión de miembro posterior derecho, aleteo bilateral simétrico, no logra volar, presenta dos plumas de sangre en miembro superior izquierdo, presenta abundante plumón, no se evidencia alteraciones en cavidad celómica y pronóstico es reservado debido a la malnutrición que presenta. El otro ejemplar se encuentra alerta al medio, con condición corporal 5/5, el paciente logra aletear, pero no vuela, no se desplaza, sus miembros posteriores presentan anquilosis esto arroja un mal pronóstico debido a la atrofia muscular.
- Teniendo en cuenta que se realizó la sensibilización sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre y todos las consecuencias legales y económicas que esto conlleva, fue posible recuperar a los ejemplares por medio de la entrega voluntaria, el hecho quedó registrado en el Formato de recepción de fauna silvestre No. 33280e donde se relacionaron los dos (2) ejemplares de Loro barbiamarillo (*Amazona amazónica*) hallados en la vivienda y se realizaron las observaciones correspondientes. (Ver anexo)
- Según la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el Loro barbiamarillo (*Amazona amazónica*) se clasifica según su estado de conservación como Preocupación Menor (LC), un taxón está en la categoría de



“Preocupación Menor” cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías arriba expuestas. Equivale a fuera de peligro. Adicionalmente para la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), se considera Apéndice II, es decir donde figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio; por otro lado, siendo consecuentes con las conductas que atentan contra la integridad de los animales, es importante mencionar el Artículo 339A del Código Penal que menciona las conductas en contra de la vida, integridad física y emocional de los animales; por ende, los ejemplares al encontrarse en cautiverio y en las condiciones mencionadas anteriormente, se generaron acciones en contra de las 5 libertades de los animales descritas en la Ley 1774 de 2016”.

3. Que acorde a la información contenida en el Informe Técnico precitado, se encuentra que la señora NATHALY ZULETA DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.425.881, presuntamente tuvo en cautiverio dos (2) ejemplares de la fauna silvestre de la especie Loro barbiamarillo (*Amazona amazónica*), hallados el 20 de junio de 2023, en el inmueble ubicado en la carrera 37 No. 71C – 32, segundo piso, Distrito Especial de Medellín - Antioquia, de los cuales hizo entrega voluntaria al personal de la Subdirección Ambiental de la Entidad, tal como quedó plasmado en el Formato de Recepción de Fauna Silvestre No. 33280e de la referida fecha, configurándose con su conducta presuntamente infracción en materia ambiental, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 6° de la Ley 2387 de 2024.
4. Que de acuerdo con lo anterior, mediante la **Resolución Metropolitana No. S.A. 003585 del 27 de diciembre de 2023**, notificada personalmente el día 16 de febrero de 2024, se inició procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la referida ciudadana, para efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales vigentes en materia del recurso fauna silvestre.
5. Que a través de la **Resolución Metropolitana No. S.A. 000490 del 11 de abril de 2024**, notificada por aviso fijado el día 23 de mayo de 2024 y desfijado el 29 del mismo mes y año, se formuló en contra de la investigada en comento el siguiente cargo único:

*“Aprovechar en la modalidad de tenencia dos (2) ejemplares de la fauna silvestre de la especie loro barbiamarillo (*Amazona amazónica*), hallados en el inmueble ubicado en la carrera 37 No. 71C – 32, segundo piso, Distrito Especial de Medellín - Antioquia, el 20 de junio de 2023, los cuales fueron entregados de manera voluntaria por la referida ciudadana en la misma fecha; situación evidenciada por personal técnico de la Subdirección Ambiental de la Entidad, según lo consignado en el Informe Técnico No. 5037 del 27 de julio del señalado año 2023, y el registro efectuado en el Formato de recepción de fauna silvestre No. 33280e del 20 de junio del mismo año; infringiendo presuntamente lo consagrado en los artículos 248 del Decreto Ley 2811 de 1974, y 2.2.1.2.1.6, 2.2.1.2.4.2 y 2.2.1.2.25.1 -numeral*





9- del Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", debidamente transcritos en la parte motiva del presente acto administrativo".

Igualmente, se informó a la presunta infractora que dentro del presente procedimiento se tendrán como pruebas las obrantes en el expediente ambiental identificado con el CM5.19.23664, además de las que se allegaren en debida forma, entre las cuales se encuentran los siguientes documentos:

- Formato de Recepción de Fauna Silvestre No. 33280e del 20 de junio de 2023.
- Comunicación oficial recibida No. 022982 del 23 de junio de 2023.
- Informe Técnico No. 5037 del 27 de julio de 2023.

6. Que en la referida Resolución Metropolitana quedó plasmada la consulta efectuada en la página WEB del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA-, el 02 de abril de 2024, en la que se observa que la investigada NO figura con antecedentes.

7. Que en la misma Resolución se estipuló como atenuante la siguiente:

"Informar a la investigada que se tendrá como atenuante de la responsabilidad ambiental la señalada en el artículo 6° de la Ley 1333 de 2009 - numeral 2-, "Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor", de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo".

8. Que revisado el Sistema de Información Metropolitano -SIM-, el 18 de junio de 2024, no se observa que la investigada haya presentado descargos, habiendo tenido la oportunidad de interponerlos entre el 31 de mayo de 2024 y el 17 de junio del mismo año.

9. Que teniendo en cuenta en esta investigación la existencia de pruebas suficientes para decidir sobre la presunta responsabilidad ambiental de la persona natural procesada, además de que la presunta infractora no aportó pruebas, ni solicitó la práctica de ellas, y estando probada la temporalidad (duración del ilícito ambiental), y que se trató de un caso de flagrancia, donde se llevó a cabo la entrega voluntaria de los dos (2) ejemplares faunísticos antes de darse inicio a este averiguatorio, esta Entidad considera que no es necesario decretar de oficio prueba alguna mediante la apertura de periodo probatorio, siendo, se reitera, suficientes las obrantes en el procedimiento sancionatorio, con las cuales se tomará una decisión de fondo.

10. Que posteriormente se expide el **Auto No. 001066 del 24 de junio de 2024**, notificado por aviso fijado el día 19 de septiembre del mismo año, donde se ordenó, entre otros



@areametropol

www.metropol.gov.co



asuntos, correr traslado a la investigada por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de dicho acto administrativo, para que en caso de estar interesada en ello, presentara dentro de dicho término su memorial de alegatos de conclusión, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de dicho acto administrativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, aplicable en este caso por principio de favorabilidad.

11. Que una vez revisado el Sistema de Información Metropolitana - SIM – de esta Entidad, el 04 de octubre de 2024 (descriptor comunicaciones oficiales recibidas), se tiene que la investigada no presentó alegatos de conclusión, habiendo tenido la oportunidad de interponerlo entre el 20 de septiembre de 2024 y el 03 de octubre del mismo año.
12. Que mediante **Ley 2387 de 2024** se modificó el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y se dictan otras disposiciones.

CONSIDERACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

I) Competencia.

13. Que en virtud del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 – modificado por el artículo 2° de la Ley 2387 de 2024 -, en concordancia con las demás normas pertinentes de la Ley 99 de 1993, es competente el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para resolver el presente asunto.

II) Medios de prueba.

14. Que en el ámbito procesal civil colombiano, el artículo 165 del Código General del Proceso (ley 1564 de 2012) reza:

“ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales”.

En este aspecto es importante anotar que el silencio del legislador frente a otro tipo de prueba distinto de los enlistados que le pueda generar un convencimiento sobre los hechos que se investigan, no significa inadmisibilidad de otro medio de prueba, por cuanto, en los términos del artículo 165 del CGP se pueden practicar “pruebas no





previstas en este código", de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes, a condición de preservar los principios y garantías constitucionales.

15. Que las pruebas que se tendrán en cuenta para resolver el presente procedimiento sancionatorio son las siguientes:

Comunicación oficial recibida con radicado N° 022982 del 23 de junio de 2023, contentiva de la queja de la que se hizo alusión en considerandos anteriores.

Formato Recepción Fauna Silvestre N° 33280e del 20 de junio de 2023, que da cuenta de la entrega voluntaria de las aves antes del inicio de la investigación.

Informe Técnico N° 005037 del 27 de julio de 2023, que evidenció la tenencia en flagrancia de dos (2) ejemplares de la fauna silvestre de la especie Loro barbiamarillo (*Amazona amazónica*) en la dirección anotada en el cargo y en poder de la acá implicada.

III) Hechos probados

16. Que valoradas las pruebas válidamente allegadas al procedimiento, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

- a. **Se probó** en la investigación que en el inmueble ubicado en la carrera 37 No. 71 C – 32, segundo piso, barrio Manrique comuna 3 del Distrito Especial de Medellín, habita la señora NATHALY ZULETA DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.425.881, quien el día 20 de junio de 2023, tenía en cautiverio dos (2) ejemplares de la fauna silvestre de la especie Loro barbiamarillo (*Amazona amazónica*).
- b. **Se constató** en este averiguatorio que la implicada hizo entrega voluntaria de los mencionados ejemplares faunísticos el 20 de junio de 2023, **antes de darse inicio a este procedimiento sancionatorio**, tal como se puede corroborar de lo reportado en el Formato de Recepción de Fauna Silvestre N° 33280e de la misma fecha y en el Informe Técnico No. 005037 del 27 de julio de 2023.
- c. **Quedó patentizado** en este procedimiento sancionatorio que la plurimencionada investigada fue quien tenía en su poder a los referidos ejemplares faunísticos, sin acreditar el correspondiente permiso para su **tenencia**.
- d. **Quedó revelado** en la investigación como temporalidad de la conducta en reproche señalada en el cargo formulado, que la misma se cometió de manera



@areametropol

www.metropol.gov.co



instantánea el 20 de junio de 2023, pues solo en esa fecha esta Entidad se percató de la tenencia de las mencionadas aves, en la casa de habitación ubicada en la dirección mencionada, y en la misma fecha se efectuó la entrega voluntaria de dichos especímenes.

17. Que se concluye del material probatorio que reposa en el expediente, tal como se explicará en la siguiente consideración, sin mayor elucubración alguna, que no se ha logrado desvirtuar por parte de la investigada el cargo que le fuere formulado, quien no ejerció su derecho de defensa, habiendo estado notificada de todos los actos administrativos.

IV) Caso Concreto

18. Que de acuerdo con el material probatorio que reposa en el expediente ambiental mencionado, se tiene la certeza que la investigada tuvo los ejemplares de la fauna silvestre referido en la Resolución que formula cargo, en el inmueble ubicado en la carrera 37 No. 71 C – 32, segundo piso, barrio Manrique comuna 3 del Distrito Especial de Medellín - Antioquia, sin el permiso para ello, los cuales se encontraban en cautiverio bajo la tenencia de la hoy implicada, en contravención de la normatividad ambiental citada al respecto; véase:

La Entidad recepcionó el 23 de junio de 2023 queja que posteriormente se radicara como **comunicación oficial recibida número 022982** de la misma fecha, mediante la cual se informa sobre la presunta tenencia en cautiverio de dos (2) especímenes de la fauna silvestre en cautiverio. En virtud de lo anterior, personal técnico de la Subdirección Ambiental de esta Entidad realizó visita el 20 de junio de esa anualidad al referido inmueble, generando el Informe Técnico No. 005037 del 27 de julio del mismo año, donde se evidenció la entrega voluntaria de las aves en mención.

En virtud de lo anterior, se inició procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la referida ciudadana, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a la normatividad ambiental vigente, en materia de fauna silvestre.

Continuando con la siguiente etapa procesal, se formula cargo a la susodicha en los términos ya indicados en consideraciones anteriores y se informó que se tendrán como pruebas en la investigación, las siguientes:

- Formato de Recepción de Fauna Silvestre No. 33280e del 20 de junio de 2023.
- Comunicación oficial recibida No. 022982 del 23 de junio de 2023.
- Informe Técnico No. 5037 del 27 de julio de 2023.



@areametropol

www.metropol.gov.co

Frente al cargo formulado no se presentan descargos por parte de la investigada, por lo que se continuó con el curso de la investigación determinándose que no habría lugar a la apertura de un periodo probatorio, toda vez que las pruebas obrantes son suficientes, aunado a que la conducta se cometió en flagrancia, procediéndose a expedir auto que traslada para alegar, guardando silencio la investigada frente al mismo.

De acuerdo con el Informe Técnico citado y la referida Acta de Entrega Voluntaria, se puede aseverar sin temor a equívocos, que en verdad la investigada tenía bajo su poder, sin amparo legal alguno, los ejemplares señalados en el cargo endilgado, encontrándose en cautiverio en la fecha y lugar mencionados.

En lo atinente a que con la tenencia de los ejemplares faunísticos se contribuyó a provocar la disminución cuantitativa o cualitativa de esta especie de fauna silvestre, en presunta contravención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.25.1 – numeral 9- del Decreto 1076 de 2015 “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*”; norma vigente para la fecha en la cual se dio inicio a este proceso, se tiene que dicha norma no será tomada en cuenta para soportar la prosperidad del cargo imputado, por cuanto no se probó en la investigación la reducción en cantidad y calidad de dicha especie.

Corolario de lo antes expuesto, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos materia de investigación y que las pruebas existentes no enervan el cargo imputado, sin que se justifique la tenencia de los plurimencionados ejemplares, se tiene que el cargo debe prosperar en esta investigación ambiental; luego, hay mérito suficiente para sancionar a la ciudadana en mención, por cuanto la Entidad tiene probado el componente objetivo de la infracción, sin que la investigada lograra desvirtuar el componente subjetivo de la conducta, el cual se presume, de lo que se deduce que asumió las consecuencias derivadas de la conducta desplegada.

Para la autoridad ambiental la actuación de la persona natural INVESTIGADA es típica, dado que la normativa vigente al momento de ocurrencia de los hechos que son materia de investigación, prohíbe la tenencia de la fauna silvestre, salvo los casos que se excepcionan, lo que no ocurre en el caso objeto de estudio; es antijurídica al menos formalmente -no se probó una antijuridicidad material-, dado que la violación a las normas ambientales constituye infracción ambiental al tenor del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009 – modificado por artículo el 6º de la Ley 2387 de 2024- sin que sea indispensable que se presente daño ambiental, y es atribuible jurídicamente; es decir, es culpable, dado que no se probó razón legal alguna para justificar la referida tenencia



(no logró demostrar la procedencia legal de los ejemplares de la fauna silvestre en mención).

El artículo 8º de la Ley 1333 de 2009 – modificada por la Ley 2387 de 2024, establece los eximentes de responsabilidad, como son: *“1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la Ley 95 de 1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista”*.

En el caso concreto, no existe prueba hasta la fecha que la plurimencionada ciudadana hubiere obrado amparada bajo alguna de las causales eximentes de responsabilidad antes aludidas, ni de que hubiere actuado diligentemente, a fin de desvirtuar la presunción de culpabilidad que pesa en su contra. Por otra parte, es importante destacar que actúa culpablemente aquella persona que de acuerdo con el ordenamiento jurídico podía proceder de otra manera. Pues bien, la acá investigada pudo proceder de una manera diferente y haber ajustado su conducta a las previsiones contenidas en la normatividad ambiental, lo que deja entrever al parecer una inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones; ergo, el cargo formulado prosperará a título de CULPA, teniendo en cuenta que no existe material probatorio que nos permita inferir que se actúa de manera intencional -DOLO-.

Finalmente, se debe indicar que miradas las condiciones de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos materia de este averiguatorio, se puede aseverar que NO se configuraron causales de agravación en esta investigación, pero se consideró en la resolución que formula cargo como causal de atenuación *“Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor”¹*, que amerita imponer como sanción principal el decomiso definitivo de los ejemplares faunísticos en mención, y como accesoria la amonestación escrita.

19. Que el artículo 42 del Decreto Ley 2811 de 1974, *“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”*, establece que *“Pertenece a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio Nacional (...)”*, en concordancia con el artículo 248, cuando regula que *“La fauna silvestre que se encuentra en el territorio Nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de los zocriaderos”*.

20. Que el artículo 2.2.1.2.1.6 del Decreto 1076 de 2015, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”*, también

¹ Numeral 2º del artículo 6º de la Ley 1333 de 2009 modificado por el artículo 13 de la Ley 2387 de 2024.



establece que *“La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies de zoocriaderos”*.

21. Que consecuente con lo anterior, el artículo 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”*, señala que el aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos solo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia.
22. Que la Corte Constitucional a través de diferentes sentencias ha aclarado que tal recurso natural es propiedad de la Nación y que está prohibida la propiedad privada del mismo, y que por el contrario debe ser protegido por todos los habitantes del territorio.
23. Que merece especial mención la Sentencia C-439 de 2011, por su claridad en cuanto a la prohibición de la tenencia de la fauna silvestre:

“No obstante, las corrientes globales de protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, derivaron en una actualización normativa según la cual la regulación relativa a animales “fieros”, hoy denominados “fauna silvestre” o “salvaje”, pasó a ser de resorte exclusivo del derecho público por virtud del artículo 248 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables —Decreto 2811 de 1974-, al tenor del cual la fauna silvestre que se encuentre en el territorio nacional pertenece a la Nación, salvo dos excepciones: los zoocriaderos y los cotos de caza de propiedad particular (art. 248).

Bajo estas condiciones, es decir, a partir del cambio drástico de los presupuestos que rigen el aprovechamiento racional de estos especímenes, del artículo 250 en adelante se reemplazan las condiciones bajo las que se puede ejercer la caza, dividiéndola en seis especialidades con sus respectivos condicionamientos y, sobre todo, advirtiendo que solamente el Estado es quien puede determinar y autorizar explícitamente qué especies pueden ser objeto de dicha actividad.

*De esta forma, **a partir del año 1974 no es posible a los particulares reclamar ningún derecho sobre especies de fauna silvestre y, en consecuencia, tampoco es posible la tenencia de estos animales** y su libre transporte por particulares. Corresponde a la Administración Pública regular el tema relativo a su clasificación, establecimiento y administración de las zonas de protección, velar por su conservación, prohibir o restringir la introducción, trasplante, transporte, cultivo y propagación de especies silvestres, imponer vedas, señalar en qué casos es posible su aprovechamiento, así como autorizar o restringir la caza por razones de subsistencia o de comercialización”*. Subraya y negrilla fuera de texto original.

24. Que es menester indicar que con base en las pruebas obrantes no se encuentra justificación suficiente para que esta Entidad exonere de responsabilidad a la señora

NATHALY ZULETA DÍAZ, con número de identificación ya anotado, por los hechos que dieron lugar a la imputación del cargo que le fuere formulado, dado que, se reitera, la Constitución Política y la Ley han previsto limitaciones al acceso y disfrute de los recursos faunísticos, en pro de asegurar la diversidad e integridad ambiental y para asegurar el goce del bien jurídico colectivo.

25. Que la ciudadana contra quien se reprocha la conducta indicada en el cargo formulado, no logró demostrar la procedencia legal de los ejemplares de la fauna silvestre en mención, en el tiempo que estuvieron en su poder en el lugar señalado, o que haya sido consecuencia de alguna de las formas de zoocrías previstas en la Ley 611 de 2000.
26. Que en virtud de lo expuesto, es pertinente hacer referencia a la Sentencia T-760 del 25 de septiembre de 2007, expediente T-1398036, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, de la cual se extraen los siguientes apartes:

“Ahora bien, conforme a lo anterior la Sala comprueba, tal y como se afirmó por parte de la entidad demandada durante el transcurso del amparo, que en el presente caso la actora no ostentó permiso, autorización o licencia para el ejercicio de la caza o, de manera especial, para justificar la tenencia sobre la especie animal referida en la acción de tutela. Tampoco se probó que la procedencia de la lora (amazona amazónica) sea consecuencia de alguna de las formas de zoocría previstas en la ley 611 de 2000 y que, por lo mismo, la tenencia del animal cumpla con los cupos globales de aprovechamiento o la capacidad de recuperación del recurso establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y, por tanto, con los parámetros que rigen el desarrollo sostenible.

Estos sucesos, confrontados con la legislación vigente en materia de aprovechamiento del recurso faunístico silvestre, constituyen razón suficiente para concluir que la actora no cumple de manera alguna con los principales requisitos constitucionales y legales para disfrutar, tener y aprovechar del ave, lo que de paso, sustenta la legalidad de las actuaciones de la Corporación Autónoma de Caldas, incluido el decomiso”.

27. Que la presunta infractora no debió tener en cautiverio los ejemplares de la fauna silvestre de la especie plurimencionada, referidos en el cargo formulado en su contra, ya que los mismos debieron permanecer en su hábitat natural, realizando las funciones propias de su especie dentro de un ecosistema.
28. Que la investigada durante el procedimiento sancionatorio ambiental no aportó las pruebas necesarias y los argumentos suficientes que **permitieran exonerarla** del cargo formulado por la Entidad; por lo tanto, con el material probatorio que se encuentra en el expediente ambiental del cual se ha hecho alusión, se tomará una decisión de fondo que resuelva a la luz del mismo, el asunto en cuestión.

Las causales de eximentes de responsabilidad establecidas en el artículo 8° de la Ley 1333 de 2009 -modificada por la Ley 2387 de 2024-:

Al tenor del mandato contenido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009 – modificada de manera parcial por la Ley 2387 de 2024 - de encontrarse probada alguna de las causales de eximentes de responsabilidad así deberá reconocerse y proceder con el archivo de las diligencias. Para tal efecto, los artículos 8° y 9° (modificado este último por el artículo 14 de la Ley 2387 de 2024) - aunque la norma remite al artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, éste se refiere a las facultades para investigar, por lo que debe entenderse la remisión al artículo 9° sobre causales de cesación del procedimiento- consagran las causales de exclusión de responsabilidad en materia ambiental. El artículo 8° en cita consigna dos causales eximentes de responsabilidad: los eventos de fuerza mayor o caso fortuito tal como lo define la Ley 95 de 1890, y el hecho de un tercero, el sabotaje o el acto terrorista.

Respecto a la fuerza mayor o caso fortuito hay que decir que ésta se configura al tenor del artículo 1° de la Ley 95 de 1890 cuando se presenta un **imprevisto** a que no es posible **resistir**, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, es decir que el evento constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito debe cumplir con dos requisitos: ser imprevisto -resulta totalmente imposible visualizar o contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia- y ser irresistible entendido este elemento como algo “inevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias” (Corte Suprema de Justicia, Sent. del 26 de enero de 1982, G.J. CLXV, pág. 21).

El hecho de un tercero se configura cuando el hecho objeto de investigación es atribuible materialmente a una persona diferente a la investigada; es decir, que no habría imputación objetiva frente a la persona vinculada a la investigación sino con otro sujeto diferente; el sabotaje se configura mediante el “daño o deterioro que en las instalaciones, productos, etc., se hace como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos” (RAE, 2015); mientras que el acto terrorista se puede entender como la ejecución de actos de violencia para infundir terror; es decir, el elemento de la violencia y la finalidad pretendida son de la esencia de esta causal de exoneración de responsabilidad.

En ese orden de ideas, no se configura en el caso objeto de estudio, alguna de las causales anteriormente señaladas, que permita inferir la exoneración de responsabilidad ambiental de la investigada por la comisión del cargo en cuestión.

29. Que la susodicha ciudadana **no logró desvirtuar la presunción de culpa o dolo**, teniendo todos los medios probatorios legales, conforme lo estipula el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 – artículo modificado por el artículo 2º de la Ley 2387 de 2024- *“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”*, que, entre otras cosas, expresa: *“en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor”*.

El dolo o la culpa presunta:

La culpabilidad de la conducta impone el deber de examinar el elemento subjetivo del tipo. Como es sabido el régimen sancionatorio ambiental consagró una responsabilidad subjetiva con inversión de la carga probatoria del dolo o la culpa, la cual pasó a estar en cabeza del investigado, tal como se desprende de los artículos 1º y 5º de la Ley 1333 de 2009 – modificados respectivamente por los artículos 2º y 6º de la ley 2387 de 2024 -, lo que significa que las infracciones ambientales en materia ambiental no se pueden imputar sin hacer la valoración subjetiva, es decir actualmente en Colombia no existe *responsabilidad objetiva* en materia ambiental². La culpabilidad exige un examen del dolo o la culpa, esta última clasificada en *grave, leve o levísima*. Es necesario puntualizar que mientras en el derecho penal el elemento central del principio de culpabilidad es el dolo; es decir, por regla general se requiere en la mayoría de los supuestos que se constate en el proceder judicial que el sujeto conocía la conducta que realizaba, tenía conciencia de la antijuridicidad y adelantó las acciones (o incurrió en las omisiones) para obtener el resultado prohibido³, en derecho administrativo sancionador la culpa es el elemento central de análisis dentro del campo subjetivo en el actuar del administrado, y el grado de culpabilidad –deber objetivo de cuidado o dolo- se torna relevante al momento de aplicar la dosimetría de la sanción, en cuyo caso el dolo agrava la sanción pero la ausencia del mismo no es causal exonerativa de responsabilidad.

Para realizar un estudio adecuado del elemento subjetivo del ilícito se debe acudir a las construcciones propias del derecho civil, pues el análisis de esta forma de comportamiento resulta insuficiente al acudir al derecho penal si se advierte que allí sólo tiene importancia la llamada *culpa temeraria* teniendo por irrelevantes los restantes grados de culpa, cosa que no ocurre en el derecho administrativo sancionatorio en el que éstos deben ser tenidos en cuenta para la determinación de la gravedad de la sanción⁴. La culpa grave⁵ –persona menos diligente-, la leve –persona diligente- y la

² Cfr. Corte Constitucional Colombiana sentencia C-595 de 2010.

³ Consejo de Estado, Ibídem.

⁴ Consejo de Estado, Ibídem.

⁵ Imprudencia temeraria.

levísima –persona más diligente–, son los grados consagrados en el artículo 63 del Código Civil Colombiano, y la forma de determinar el nivel de diligencia exigido en cada caso es, según el Consejo de Estado⁶, acudir a establecer: 1) si el Legislador en todas las infracciones o en la regulación de los ilícitos concretos exige el máximo grado de culpa, 2) si el Legislador consagró que la conducta prohibida se materializa con la sola inobservancia de la norma⁷, y 3) si el Legislador no exigió un baremo concreto de medición en cuyo caso se acude a la técnica de “*numerus apertus*”.

El régimen sancionatorio ambiental exige el máximo nivel de diligencia⁸ de suerte que se responde hasta por la *culpa levísima*, por las siguientes razones: *i)* el Legislador consideró que la sola inobservancia de una norma es constitutivo de infracción ambiental, tal como se desprende del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009 - modificado por el artículo 6º de la Ley 2387 de 2024 - cuando establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de los Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos con contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente, *ii)* los asuntos ambientales imponen una obligación superior de conocimiento y comprensión de las normas que los regulan, teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades o el incumplimiento de los deberes genera unos riesgos para la sociedad, por ejemplo, la inobservancia de las normas sobre fauna silvestre.

30. Que en el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental adelantado, se ha dado la oportunidad a la implicada en cuestión, para presentar sus descargos; así como aportar o solicitar la práctica de pruebas, y allegar su memorial de alegatos de conclusión, como una manera de garantizar el derecho fundamental al debido proceso y hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción.
31. Que por lo expuesto, es importante destacar que las normas ambientales son de orden público, de ahí que su exigencia sea de carácter obligatorio, ello indica que tanto las personas naturales y jurídicas, privadas o públicas, deben acatar su mandato, por

⁶ Ibidem.

⁷ Explica el Consejo de Estado: “no se trata del establecimiento de un régimen de responsabilidad objetivo sino de la exigencia de un deber de máxima diligencia pues en algunas oportunidades se pide una obligación superior de conocimiento y comprensión de las normas que regulan un sector administrativo, especialmente de aquellas actividades que conllevan la generación de riesgos para la sociedad”.

⁸ Es pertinente recordar que el artículo 50, numeral 6º de la Ley 1437 de 2011 establece como criterio para la graduación de la sanción administrativa el grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales.



cuanto son el desarrollo de los deberes establecidos en la Constitución Política. Así en su artículo 8, establece:

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".

Y en su artículo 79, contempla:

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

Igualmente, el artículo 80 de la misma Carta, consigna:

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas".

32. Que esta Autoridad Ambiental, apoyada en los fundamentos técnicos y jurídicos del caso, y una vez observadas con plenitud las formas propias del procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009 - modificada por la ley 2387 de 2024 -, y siendo la oportunidad procedimental para calificar la falta en que incurrió la señora NATHALY ZULETA DÍAZ, procederá a declararla responsable ambientalmente del cargo formulado en la Resolución Metropolitana No. S.A. 000490 del 11 de abril de 2024, por la infracción a lo dispuesto solo en lo consagrado en los artículos 248 del Decreto Ley 2811 de 1974; 2.2.1.2.1.6 y 2.2.1.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
33. Que en el caso que nos ocupa, se tiene probado en el expediente que los ejemplares objeto de la investigación estaban bajo la tenencia de la investigada y que fueron entregados de manera voluntaria, lo cual sucedió antes de darse inicio a esta investigación; por lo tanto, frente a dichos ejemplares de esa especie de la fauna silvestre colombiana será aplicable imponer como sanción principal su **DECOMISO DEFINITIVO** y como sanción accesoria **AMONESTACIÓN PÚBLICA ESCRITA**, de



conformidad con el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 37 y 47 ibidem – modificados los dos primeros por los artículos 17 y 20 de la Ley 2387 de 2024-.

34. Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 – modificada por la Ley 2387 de 2024 - se presume la culpa o dolo de la investigada, el cual tendrá a su cargo desvirtuarla, significando lo anterior que una vez probada la parte objetiva por parte de la autoridad ambiental, los hechos constitutivos de la conducta como ya se demostró en la presente investigación, corresponderá a la investigada desvirtuar el componente subjetivo. Así las cosas, se reitera, la conducta que se imputará es a **título de culpa** por las siguientes razones:

- La presunta infractora no desvirtuó la presunción de culpabilidad contenida en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1333 de 2009 -artículo modificado por el artículo 2º de la Ley 2387 de 2024-, conforme al cual corresponde al investigado aportar prueba suficiente e idónea para acreditar la existencia de una causal de ausencia de responsabilidad (fuerza mayor o caso fortuito; o hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista), o bien, la ausencia de dolo o culpa.
- En el caso concreto, no existe prueba que la referida señora hubiere obrado amparada bajo alguna de las causales eximentes de responsabilidad antes aludidas, ni de que hubiere actuado diligentemente, a fin de desvirtuar la presunción de culpabilidad que pesa en su contra.
- Por otra parte, es importante destacar, se reitera, que actúa culpablemente aquella persona (entiéndase natural o jurídica) que de acuerdo con el ordenamiento jurídico podía proceder de otra manera. Pues bien, la acá investigada pudo proceder de una manera diferente y haber ajustado su conducta a las previsiones contenidas en la normatividad ambiental. Y es que conocía o debió conocer la prohibición de tener en su poder FAUNA SILVESTRE, y pese a ello, realizó dicha actividad, lo que deja entrever una inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
- Del análisis del material probatorio que reposa en el expediente **CM5.19.23664** (FAUNA), se tiene certeza de la ocurrencia del hecho – *Aprovechar en la modalidad de tenencia ejemplar de la fauna silvestre*-, de la inexistencia de causales eximentes de responsabilidad y de la responsable del mismo, por lo que es procedente determinar la sanción a imponer de conformidad con la Ley 1333 de 2009 – modificada por la Ley 2387 de 2024- y el Decreto 1076 de 2015.

V) Sanción a imponer y dosimetría:



@areametropol

www.metropol.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 (57-4) 604 3856000



35. Que en caso de encontrarse responsable a la investigada, la sanción a imponer será una o algunas de las consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 – modificado por el artículo 17 de la Ley 2387 de 2024-.
36. Que una vez configurada la infracción ambiental es procedente determinar la sanción a imponer. Para efectos de lo anterior, es pertinente señalar que estas están consagradas en la Ley 1333 de 2009 en el artículo 40, modificado por el artículo 17 de la Ley 2387 de 2024, precisándole a la parte investigada, que si bien el artículo 49 de la primera ley fue reformado por el artículo 21 de la segunda, creando una nueva sanción consistente en “Servicio Comunitario y Cursos Obligatorios Ambientales”, la misma está pendiente de reglamentación por parte del Gobierno Nacional⁹; por tanto, dicha sanción no podría aplicarse actualmente al presente proceso sancionatorio ambiental en caso de comprobarse responsabilidad ambiental a la implicada en este averiguatorio:

“Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. La autoridad ambiental competente impondrá al (los) infractor (es), de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita
 2. Multas hasta por cien mil salarios mínimos mensuales legales Vigentes (100.000 Solario Mínimo Mensual Legal Vigente).
 3. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
 4. Revocatorio o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
 5. Demolición de obra a costa del infractor.
 6. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
 7. Restitución de especímenes de especies de flora y fauna silvestres o acuática”.
37. Que mediante el Decreto No. 3678 del 04 de octubre de 2010¹⁰, con fundamento en las facultades otorgadas por el Legislador en el parágrafo 2º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 - modificado por el artículo 17 de la Ley 2387 de 2024 -, el Gobierno Nacional estableció los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el citado

⁹ Parágrafo único del artículo 49 de la Ley 1333 de 2009 - modificado por el 21 de la Ley 2387 de 2024.

¹⁰ Derogado y compilado por el Decreto 1076 de 2015.



artículo, transcrito, descartando la sanción de multa, teniendo en cuenta que se llevó a cabo la entrega voluntaria de las aves antes de darse inicio a esta investigación, habiéndose configurado la causal relacionada con *“Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor”*.

- 37.1. El artículo 5° del citado Decreto establece tres (3) criterios para imponer la sanción de *cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación, o servicio*, los cuales no se cumplen en el presente asunto por la siguiente razón: El aprovechamiento de la fauna silvestre está prohibido, salvo algunos casos en que se requiere obtener previamente la respectiva autorización, y su incumplimiento se sanciona mediante el presente acto administrativo.
- 37.2. El artículo 6° del citado Decreto establece un (1) criterio para imponer *revocatoria de la licencia, concesión, permiso o autorización*, a saber, la reincidencia en el incumplimiento de las medidas establecidas en las autorizaciones ambientales, siempre que se califique como grave el incumplimiento; en este caso no es procedente la imposición de una medida de este tipo, pues precisamente lo que se reprocha es la tenencia ilegal de la fauna silvestre.
- 37.3. El artículo 7° del citado Decreto establece tres (3) criterios para imponer la sanción *demolición de la obra a costa del infractor*, los cuales no se cumplen en el presente asunto, toda vez que la infracción normativa no está relacionada con una obra.
- 37.4. El artículo 8° del referido Decreto, señala la sanción de *decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción*, la cual APLICA en el caso concreto, dado que existe objeto material sobre el cual puede recaer esta sanción.
- 37.5. El artículo 9° de plurimencionado Decreto consagra la sanción de restitución de especímenes de fauna silvestres, la cual NO aplicará en este asunto, dado que se impondrá como sanción principal, la relacionada con el decomiso definitivo y como accesoria la Amonestación Escrita.
- 37.6. El artículo 10 del citado Decreto, establece la sanción de *trabajo comunitario*, la que no aplicaría en el presente asunto por dos (2) razones: **a)** el Gobierno Nacional no ha reglamentado el asunto, y si se acepta en gracia de discusión que aún ante la carencia de reglamentación se puede aplicar, **b)** la misma sólo aplica cuando la capacidad socioeconómica del infractor lo amerite, y en este caso la Entidad solamente impondrá las sanciones consistentes en el decomiso definitivo, como principal, y la

amonestación escrita, como accesoria. Al respecto, el artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 21 de la Ley 2387 de 2024, hace alusión a esta sanción, con otra denominación y alcance, la cual está sujeta a reglamentación: “Servicio Comunitario y Cursos Obligatorios Ambientales”.

37.7. Debido a lo anterior, se impondrá como sanción principal el **DECOMISO DEFINITIVO DE LOS ESPECÍMENES** en comento y como sanción accesoria la **AMONESTACIÓN PÚBLICA ESCRITA** (la cual deberá incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental o servicio comunitario de que trata el artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 21 de la Ley 2387 de 2024, advirtiendo que el infractor que incumpla el servicio comunitario o la asistencia al curso será sancionado con multa equivalente hasta de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011, siendo la parte investigada una persona natural), apartándonos de la sanción de MULTA, toda vez que se repite, se probó en la investigación la entrega voluntaria de los referidos ejemplares faunísticos en la visita técnica llevada a cabo por parte de esta Entidad, logrando el presente proceso **disuadir, prevenir y corregir conductas que atenten contra el recurso natural Fauna Silvestre**; dicha entrega se derivó del **efecto disuasivo que tuvo en la implicada la visita técnica llevada a cabo**, quien reflexionó sobre las consecuencias de sus acciones, evitando con la referida entrega voluntaria generar conductas dañinas para el medio ambiente y los recursos naturales.

38. Que además de lo anterior, el artículo 20 de la Ley 2387 de 2024, el cual modificó el artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 20. AMONESTACIÓN ESCRITA COMO SANCIÓN. Modifíquese el artículo 37 de la Ley 1333 de 2009 el cual quedará así:

Artículo 37. Amonestación Pública Escrita Como Sanción. Consiste en la llamada de atención escrita a quién ha infringido las normas ambientales y ha cometido infracción ambiental, esta deberá ser publicada en la página web de la autoridad ambiental competente y en la(s) alcaldía (s) donde ocurrió la infracción, sin perjuicio de su inclusión en el RUJA. La amonestación deberá incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental o servicio comunitario de que trata el artículo 49 de esta ley. El infractor que incumpla el servicio comunitario o la asistencia al curso será sancionado con multa equivalente hasta de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011. Esta sanción se aplicará cuando el presunto infractor sea una persona natural y podrá reemplazar la multa sólo cuando la capacidad socioeconómica del infractor sea insuficiente.”¹¹

¹¹ Subrayado y negrilla por fuera del texto original.

39. Que dentro de estas diversas modalidades de sanciones, cada situación amerita un estudio detenido en aras de imponer, teniendo presente criterios de racionalidad, la sanción que guarde proporcionalidad con la gravedad de la infracción, y, en el caso concreto, se impondrá como sanción principal el **DECOMISO DEFINITIVO DE LOS ESPECÍMENES EN MENCIÓN** contemplada en el numeral 6 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 – artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 2387 de 2024 -, en concordancia con el artículo 2.2.10.1.1.2, parágrafo 3º, del Decreto 1076 de 2015 que compiló y derogó el artículo 2º del Decreto 3678 de 2010; y como sanción accesoria, **AMONESTACIÓN PÚBLICA ESCRITA**, estipulada en el numeral 1-, en concordancia con el artículo 37, modificado por el artículo 20 de la nueva ley citada.

Artículo 40 Ley 1333 de 2009 – modificado por el artículo 17 de la Ley 2387 de 2024.
Sanciones:

“(…)

Amonestación escrita.

(…)

Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.

(…)”

Decreto 3678 de 2010 (compilado y derogado por el Decreto 1076 de 2015):

Artículo 2º, parágrafo 3º (compilado y derogado por el artículo 2.2.10.1.1.2, parágrafo 3º, del Decreto 1076 de 2015). Tipos de sanción:

“Parágrafo 3º. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente, únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones accesorias.”

(…)”

40. Que se reportarán las sanciones impuestas, una vez en firme el presente acto administrativo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para efectos de que dicha información obre como antecedente en el Registro Único de Infractores Ambientales -RUIA-, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la Ley 1333 de 2009 -modificada por la Ley 2387 de 2024-.



@areametropol

www.metropol.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 (57-4) 604 3856000

41. Que además de la atenuante citada estipulada en el numeral 2 del artículo 6° de la Ley 1333 de 2009 -artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2387 de 2024-, la cual fue tenida en cuenta en la Resolución Metropolitana de formulación del cargo en comento, también se tendrá como atenuante la consagrada en el numeral 3 del artículo 6° de la ley en mención, modificada esta por la ley señalada, que indica *“Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud humana”*, pues no se comprobó que con la conducta de tenencia de fauna desplegada por la investigada, se haya causado un daño al respecto. Esta última atenuante podrá aparecer inclusive al momento del fallo, bajo el principio de favorabilidad, conforme lo contemplado en el Memorando No. 001823 del 5 de diciembre de 2022, expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
42. Que se comunicará el presente acto administrativo a la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia, en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 – modificada por la Ley 2387 de 2024.
43. Que se remitirá para su correspondiente publicación en la página Web, copia del presente acto administrativo, a la **Alcaldía del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín**, donde ocurrió la infracción, de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 2387 de 2024.
44. Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el literal j) del artículo 7° de la Ley 1625 de 2013, otorga competencia a las áreas metropolitanas para asumir funciones como autoridad ambiental en el perímetro urbano de los municipios que la conforman.
45. Que de conformidad con lo expresamente establecido en el numeral 17 del artículo 31, y los artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, y artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 2° de la Ley 2387 de 2024, el Área Metropolitana Valle de Aburrá es competente, entre otros asuntos, para iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios e imponer las sanciones a que haya lugar por infracción a la normatividad ambiental vigente.

RESUELVE

Artículo 1°. Declarar responsable ambientalmente a la señora NATHALY ZULETA DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.425.881, del cargo señalado en el artículo 1° de la Resolución Metropolitana No. S.A. 000490 del 11 de abril de 2024, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente actuación administrativa.



Parágrafo. Considerar como causales de atenuación de la responsabilidad de la referida ciudadana, las relacionadas en los numerales 2 y 3 del artículo 6º de la Ley 1333 de 2009 -artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2387 de 2024-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo:

“2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor”.

“3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud humana”.

Artículo 2º. Imponer a la señora NATHALY ZULETA DÍAZ, las siguientes sanciones ambientales:

SANCIÓN PRINCIPAL:

- **DECOMISO DEFINITIVO:**

Decomisar de manera definitiva los siguientes especímenes vivos de fauna silvestre:

Dos (2) ejemplares de la fauna silvestre de la especie Loro Barbiamarillo (*Amazona amazónica*), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

SANCIÓN ACCESORIA:

- **AMONESTACIÓN PÚBLICA ESCRITA:**

Amonestar a la señora NATHALY ZULETA DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.425.881, por la comisión de la infracción establecida en el cargo único señalado en el artículo 1º de la Resolución Metropolitana No. S.A. 000490 del 11 de abril de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa.

Parágrafo 1º. Informar a la investigada que la sanción accesoria contenida en el presente acto administrativo será publicada en la página web de esta autoridad ambiental y en la Alcaldía **del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín**, donde ocurrió la infracción, sin perjuicio de su inclusión en el Registro Único de Infractores



@areametropol

www.metropol.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 (57-4) 604 3856000



Ambientales – RUIA-, de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 2387 de 2024-.

Parágrafo 2º. La amonestación impuesta como sanción accesoria incluye la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental o servicio comunitario de que trata el artículo 49 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 21 de la Ley 2387 de 2024; comparecencia que esta Entidad informará de manera oportuna a la parte sancionada con posterioridad a la ejecutoria de esta resolución, donde se le indicará fecha, hora y lugar del curso o servicio comunitario a realizar.

Parágrafo 3º. Advertir a la señora NATHALY ZULETA DÍAZ que el incumplimiento del servicio comunitario o la asistencia al curso será sancionado con multa equivalente hasta de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 21 de la Ley 2387 de 2024, que modifica el artículo 49 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 4º. Informar que la reiteración de este tipo de conductas dará lugar a la imposición de sanciones más graves, de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 3º. Advertir que la sanción impuesta mediante la presente Resolución no exime del cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de los actos administrativos expedidos por esta Entidad y de observar las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

Artículo 4º. Reportar la sanción impuesta, una vez en firme el presente acto administrativo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para efectos de que dicha información obre como antecedente en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA-, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y subsiguientes de la Ley 1333 de 2009 -modificada por la Ley 2387 de 2024-.

Artículo 5º. Comunicar a la Procuraduría 1ª Agraria y Ambiental de Antioquia, el presente acto administrativo, en los términos y condiciones establecidos en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 -modificada por la Ley 2387 de 2024-.

Artículo 6º. Remitir a la Alcaldía del MUNICIPIO DE MEDELLÍN D.E., con NIT No. 890.905.211-1, copia del presente acto administrativo, para la respectiva publicación de la sanción consistente en Amonestación Pública Escrita, en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 2387 de 2024.





Artículo 7º. Informar que las normas que se citan en esta actuación administrativa pueden ser consultadas en la página web de la Entidad www.metropol.gov.co haciendo clic en el Link "La Entidad", posteriormente en el enlace "Información legal" y allí en -Buscador de normas-, donde podrá buscar las de interés, ingresando los datos identificadores correspondientes.

Artículo 8º. Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora NATHALY ZULETA DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.425.881, en condición de investigada, o a quien autorice expresamente por medio de escrito, o a su apoderado legalmente constituido, quien deberá acreditar la calidad conforme lo prevé la Ley. En caso de no ser posible la notificación personal, se hará por aviso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, "*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*".

Artículo 9º. Informar que de conformidad con el artículo 2º de la Resolución Metropolitana No. D. 723 del 2 de junio de 2020, para el servicio a la ciudadanía y las respectivas notificaciones y comunicaciones de los actos administrativos, la Entidad tiene dispuesto el correo electrónico atencionausuario@metropol.gov.co, al cual también se deberá allegar por parte del usuario, toda la información necesaria para solicitudes, iniciar trámites, dar respuestas a requerimientos, interponer recursos, entre otros.

Artículo 10º. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental Virtual que puede ser consultada en nuestra página web <http://www.metropol.gov.co/paginas/gaceta.aspx>, a costa de la Entidad, conforme lo disponen los artículos 70 –inciso segundo- y 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 7º de la Ley 1712 de 2014, "*Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones*", en concordancia con la Resolución Metropolitana No. D. 002854 del 23 de diciembre de 2020, "*Por medio de la cual se establece la gratuidad de la publicación de los actos administrativos en la Gaceta Ambiental*".

Artículo 11º. Indicar a la investigada que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Se advierte que esta Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 Ibídem, podrá resolver el recurso de reposición, siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



@areametropol

www.metropol.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 ☎ (57-4) 604 3856000



20241021095865124112240

RESOLUCIONES METROPOLITANAS

0ctubre 21, 2024 9:58

Radicado 00-002240



Página 27 de 27

Artículo 12º. Archivar el expediente ambiental identificado con el **CM5.19.23664**, una vez en firme el presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ALEJANDRO VASQUEZ CAMPUZANO

Subdirector Ambiental

Firmado el 21/10/2024

LUIS GABRIEL ESCOBAR TRUJILLO

Director Jurídica Ambiental

Firmado el 21/10/2024

Aprobó

ALEJANDRA MARIA CARDENAS NIETO

Profesional Universitario

Firmado el 21/10/2024

Revisó

LUZ MARIA ZABALA TOBON

Contratista

Firmado el 18/10/2024

Proyectado por: LUZ MARIA ZABALA TOBON (CONTRATISTA)

CM5.19.23664 / Trámites:

1448018.



@areametropol

www.metropol.gov.co

Carrera 53 # 40 A - 31 ☎ (57-4) 604 3856000